Informe alternativo para el Examen de Colombia
de los 15° y 16° informes periódicos (CERD/C/COL/15-16) sobre su cumplimiento con
la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
Racial

HAROLD SÁNCHEZ PIAMBA

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

Bogotá, 2016

Informe alternativo para el Examen de Colombia
de los 15° y 16° informes periódicos (CERD/C/COL/15-16) sobre su cumplimiento con
la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
Racial

HAROLD SÁNCHEZ PIAMBA

MAESTRIA EN DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS ANTE ORGANISMOS
INTERNACIONALES

DOCENTE TUTOR

CARLOS RODRÍGUEZ MEJÍA

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

Bogotá, 2016

CONTENIDO

1. Presentación	4
2. Deficiencias en el marco legal, institucional, y de políticas públicas	5
2.1. la falta de información sobre la composición demográfica de la población	5
2.2. La falta de representación y participación de la población Afrodescendiente en la esfera política y pública	6
2.3. Sesgos inherentes en las políticas y planes nacionales de desarrollo	8
3. Políticas que promueven o permiten la minería ilegal: situación de los derechos humanos de las comunidades afro descendientes en el Norte de Cauca.	12
4. Minería en el Norte de Cauca	13
4.1. La minería realizada por las comunidades Afrodescendientes	13
4.2.1. Caso San Antonio	16
4.2.2. Caso La Toma	16
5. La situación de concesiones ilegales a empresas mineras	17
6. Impactos sobre los derechos humanos colectivos de las comunidades	20
6.2. Sobre consulta previa.....	23
7. Defensores y defensoras de derechos humanos	25
8. Recomendaciones	27
9. Bibliografía	29

1. PRESENTACIÓN

(Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, 1996), (Familia Franciscana en Colombia, 1996) y (Franciscans International, 1982) presentan sus aportes con el fin de contribuir a la evaluación de Colombia por el Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, durante su 87ª sesión en agosto de 2015.

Hacemos énfasis en la situación de los derechos humanos del pueblo Afrodescendiente, Negro, Raizal y Palenquero. La información y el análisis que aportamos son el resultado del acompañamiento que la ACONC, FFC y FI que vienen haciendo al proceso adelantado por comunidades Afrodescendientes del departamento del Cauca, quienes se encuentran empeñadas en la defensa del derecho a la vida en sus territorios ancestrales, y de manera especial de los derechos al agua y a un ambiente sano—todo ello puestos en peligro por la explotación minera en los territorios comunitarios.

La parte I del informe estudia tres **deficiencias: en el marco legal, institucional, y de políticas públicas:** (A) la falta de información sobre la composición demográfica de la población; (b) la falta de representación y participación de la población Afrodescendiente en la esfera política y pública; y (C) los sesgos inherentes en las políticas y planes nacionales de desarrollo.

Parte II documenta, **los impactos discriminatorios de las políticas que promueven y permiten la minería ilegal**, el caso del Norte de Cauca como ilustración. Presentamos (A) la realidad de la minería ilegal e inconstitucional en el Norte de Cauca, (B) los impactos sobre los derechos humanos colectivos de las comunidades, especialmente sobre el agua, el desplazamiento forzado, y la situación de las mujeres Afrocolombianas; (C) el respeto a la consulta previa; (D) la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos. Parte III presenta las recomendaciones.

Como concluyó la Experta independiente de la ONU sobre cuestiones de las minorías en su misión a Colombia en 2010: “Pese a la multitud de iniciativas legislativas, políticas y programas adoptados por el Gobierno, su mala aplicación y los escasos recursos

destinados hacen que los resultados sean insuficientes para responder a las necesidades de los Afrocolombianos (McDougall, 2011).” Al contrario, el Estado promueve políticas y acciones que crean condiciones de vulnerabilidad—como es el fomento a las políticas extractivas—arraigando así el racismo estructural en el país, como lo evidencia el artículo del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina OCMAL, en informe publicado en Colombia el 24 de agosto de 2014, revista CEPA; (González, 2011) el 47% del Plan Nacional de Desarrollo de Colombia 2010 – 2014, esta destinado a la competitividad y crecimiento económico, la finalidad de este alto porcentaje es de jalonar el producto interno bruto. Para lograrlo el mismo plan define tres pilares innovación, políticas de competitividad y productividad y las locomotoras.

2. DEFICIENCIAS EN EL MARCO LEGAL, INSTITUCIONAL, Y DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Resaltamos tres cuestiones de fondo a nivel general nacional que tienen un gran impacto sobre la situación de los derechos humanos de las comunidades Afrocolombianas. El comité atiende a esas deficiencias estructurales que están en la raíz de varios problemas de discriminación; como contribución a promover cambios duraderos en el cumplimiento del Estado Colombiano con la Convención. Destacamos:

- A. Deficiencias en el censo y el la recolección de datos demográficos
- B. Falta de representación y participación política y
- C. Marginación de los derechos de los Afrodescendientes en los planes nacionales de desarrollo y definición de políticas que impactan sus vidas y autonomía.

2.1. LA FALTA DE INFORMACIÓN SOBRE LA COMPOSICIÓN DEMOGRÁFICA DE LA POBLACIÓN

En su examen de Colombia en el 2009 el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial constató “la considerable disparidad existente en la información disponible sobre el porcentaje de la población que se identifica como Afrocolombiana y observa que los

resultados del censo de 2005 difieren de otras encuestas de población (CERD, 28 de agosto de 2009).” La Experta independiente sobre cuestiones de las minorías también observó que “el censo no logró reflejar fielmente la situación demográfica y socioeconómica de la población Afrocolombiana. (McDougall, 2011)” Sin embargo, el gobierno sigue hasta hoy manejando los datos obtenidos en el censo del 2005 (Unidas, junio 12 de 2015).

Según el censo de 2005 en Colombia hay 4.281.182 Afrodescendientes, que corresponden al 10.5% de la población total. Las organizaciones Afrodescendientes, la Defensoría del Pueblo, y estudios demográficos por parte de diversos académicos están de acuerdo en que los Afrodescendientes constituyen entre el 25 y 26% del total de la población Colombiana, es decir más de 15 millones de personas.

Las deficiencias en la recolección y sistematización de buenas estadísticas sobre la población Afrodescendiente y sus condiciones de vida contribuyen a problemas y sesgos en las políticas públicas, lo cual constituye un factor de discriminación racial.

Siguen necesarias las recomendaciones del Comité hechas en 2009: que el Estado “ siga mejorando su compilación de información sobre la situación de los grupos étnicos en los ámbitos económico, social y cultural;” que “garantice que las preguntas de los futuros censos de población se formulen de una manera que permita y fomente la auto identificación de las personas pertenecientes a grupos étnicos o indígenas;” y que “celebre consultas con las comunidades interesadas sobre las medidas destinadas a mejorar la recolección de datos y también al elaborar y realizar el próximo censo de población (Naciones Unidas, 28 Agosto de 2009).”

2.2. LA FALTA DE REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE EN LA ESFERA POLÍTICA Y PÚBLICA

El Relator del país para el presente examen expresó su particular interés en la representación y participación política (Naciones Unidas, 12 junio 2015). Además de ser derechos independientes, la garantía de representación y participación de la población

Afrodescendiente tiene la función de promover políticas públicas que tenderían a adecuarse mejor a las situaciones de las comunidades.

El Artículo 176 de la Constitución Nacional, desarrollado posteriormente por la ley 649 de 2001, *modificado por el Acto Legislativo 02 de 2005, art 1. Modificado por Acto Legislativo 03 de 2005 art 1. Modificado por Acto Legislativo 01 de 2013 de 2013 art 1. Modificado Acto Legislativo 02 de 2015 art 6; La circunscripción territorial conformada por el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, erigirá adicionalmente un (1) Representante por la comunidad raizal de dicho departamento de conformidad con la ley.*

En el informe presentado por el Gobierno “se resalta, la existencia de las circunscripciones electorales especiales indígenas y afro, que garantizan la representación de estas minorías en el Congreso de la República (Estado Colombiano, 2014).

Sin embargo en la práctica no ha funcionado. La elección de los Representantes a la Cámara realizada en los pasados comicios electorales ha puesto en entredicho la eficacia de estos requisitos para garantizar su representación en este escenario. En marzo de 2014 para los dos cupos reservados específicamente para esta población han sido elegidas dos personas que no son Afrodescendientes y que muchos en la comunidad dice no los representan (MUNDO, 2014).

Para lanzarse a una de estas curules, basta con autodenominarse Afrocolombiano y conseguir el aval de alguna organización inscrita ante la Dirección de Asuntos Afrocolombianos del Ministerio del Interior, tal como lo establece la ley 649 de 2001, artículo 3.

Esta situación frustra el objetivo de la Constitución en garantizar visibilidad para una población tradicionalmente sub representada. Además la ausencia de interlocutores comprometidos con la situación de las comunidades Afrodescendientes dificulta la implementación de políticas públicas que garanticen su atención y reivindiquen sus derechos.

Para implementar cambios orientados a regular en mejor forma las falencias de fondo y de forma que actualmente tienen a los Afrodescendientes sin representación real en la rama legislativa, se necesita de la voluntad política que lleve a una reforma legislativa. Dicha iniciativa deberá, con la participación del pueblo Afrocolombiano, Negro, Raizal y Palenquero, replantear los requisitos necesarios para entrar en la contienda electoral con miras a representar las curules especiales afro en el Congreso de la República. Dichas iniciativas han sido presentadas al Congreso de la República para que se de una participación real, ello quedó plasmado en el proyecto de Ley Estatutaria No 125 de 2012, “Por el cual se establece la Ley de Participación y Representación de las Comunidades Negras, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras”, con el fin de alcanzar una mayor igualdad de oportunidades que es el principio fundamental de toda sociedad meritocrática, en áreas de educación, participación política y democrática, y desarrollo social, laboral y económico.

De igual manera se presentó el Proyecto del Ley No 10 de 2012 Senado, por el Cual se reglamenta la adecuada y efectiva participación de la población Negra Afrocolombiana en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público de conformidad con el artículo 13 y 40 de la Constitución Nacional.

Con estas iniciativas los actores buscan la realización de una acción afirmativa en pro de los pueblos Afrocolombianos, Negros, Raizales y Palenqueros, que conlleve su inclusión en las ofertas del poder en el país, evitando actos aislados de discriminación, con dichos proyecto de ley se pretende la realización de la equidad en la participación real por medio de una representación acorde para la población conforme a su composición étnica, dentro de los espacios decisorios que posiblemente los afecten. Proyectos de Ley que fueron archivados por el Congreso de la República según la Gaceta del Senado 2015.

2.3. SESGOS INHERENTES EN LAS POLÍTICAS Y PLANES NACIONALES DE DESARROLLO

“Las zonas con alta densidad de población Afrocolombiana son prácticamente las mismas donde hay extrema pobreza (McDougall, 2011).” Así que deberían ser los y las

ciudadanas con prioridad en términos de beneficios y participación en el Plan de Desarrollo.

El Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 (PND) pretende tener un enfoque orientado hacia la eliminación del fenómeno de la discriminación y la consecuente garantía de la igualdad real (Estado Colombiano, 2014). Sin embargo este Plan no tiene cómo alcanzar este objetivo ya que en el diseño del Plan en si no se respetó los derechos a la consulta previa, libre e informada (OIT 169), y el modelo de desarrollo que promueve es el que se ha comprobado depender del menoscabo y vulneración de los derechos de las comunidades Afrodescendientes.

Teniendo en cuenta que la Consulta Previa es un Derecho Fundamental que tienen los pueblos étnicos cuando se toman medidas legislativas o administrativas o cuando se vayan a realizar proyectos, obras, actividades dentro de los territorios, buscando proteger su integridad cultural, social y económica y para garantizar el derecho a la participación (Universidad del Rosario, 2010).

La Sentencia SU_039 de 1997 señaló los parámetros para la realización de las consultas previas con los grupos étnicos del país.

Según la Corte Constitucional dejó claro en esta jurisprudencia que la Consulta Previa se constituye en un derecho Fundamental cuando manifestó que “ la explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas debe hacerse compatible con la protección que el Estado debe dispensar a la integridad social, cultural y económica de las comunidades indígenas...”

Y continua la Corte Constitucional: “De este modo, el derecho fundamental de la comunidad a preservar la integridad se garantiza y efectiviza a través del ejercicio de otro derecho que también tiene el carácter de fundamental, como es el derecho de participación de la comunidad en la adopción de las referidas decisiones

En una reciente jurisprudencia de la Corte Constitucional T – 579 de 2014, se da una serie de órdenes muy claras respecto de la consulta con los pueblos Afrocolombianos, se ordena al Ministerio del Interior de publicar y divulgar la “Propuesta de protocolo de

consulta previa, libre y vinculante para comunidades negras, afrocolombianas y palenqueras de áreas rurales y urbanas”

Se evidencia que se ha incorporado el enfoque diferencial como un lineamiento estratégico en las acciones de política pública, el Gobierno cita en su informe el siguiente reconocimiento en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014:

“El Estado debe garantizar tanto un crecimiento económico sostenible, como un desarrollo social integral. En relación con este segundo objetivo, uno de los principales desafíos ha sido alcanzar la inclusión social de los diferentes grupos étnicos, por lo que entre los lineamientos de política pública se encuentra hacer especial énfasis en el desarrollo de planes, programas y proyectos dirigidos a segmentos específicos de la población Afrodescendiente, Negra, Palenquera, Raizal (ANPRA), los pueblos indígenas y el pueblo Rom o gitano (Estado Colombiano, 2014).

A pesar de la anterior formulación, el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 fue aprobado sin cumplir el requisito legal de consulta previa, libre e informada al pueblo Afrodescendiente. En el proceso de aprobación no fueron atendidas las recomendaciones presentadas por la Autoridad Nacional Afrocolombiana (Anafro) que agrupa a más del 80% de la población Afrodescendiente y quienes exigían la elaboración de la consulta previa antes de proceder a su aprobación. Se dio margen de las comunidades Afrodescendientes, desconoce la vinculación de éstas con su territorio y la concepción de sus propios procesos de desarrollo, según quedó plasmado en la comunicación enviada por la Organización ANAFRO, al Congreso de la República el 13 de abril de 2015, en cabeza del doctor José David Name, Presidente del Senado y Fabio Raúl Amín Presidente Cámara de Representantes, en el que se manifiesta las violaciones sistemáticas que se han tenido con los grupos étnicos y raizales en las distintas iniciativas de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo.

Por otra parte, la obligatoriedad de integrar al Plan Nacional de Desarrollo el Plan Integral formulado y presentado por las organizaciones del Movimiento Afrodescendiente no se ha cumplido, teniendo en cuenta los acuerdos firmados en el Primer Congreso Nacional Autónomo del Pueblo Negro, Afrocolombiano, Raizal y Palenquero, realizado en el año

2013, en el que se advierte al gobierno que se debe cumplir con lo establecido por la Honorable Corte Constitucional, para la Consulta Previa Libre e Informada, con todos los grupos étnicos existentes en Colombia. (ANAFRO, 2016).

Por esto, no sorprende que la orientación y contenido del PND no responda a la realidad de estas comunidades; al contrario promueve un modelo de desarrollo que genera desproporcionalmente impactos negativos sobre comunidades Afro.

Aunque el actual Plan de Desarrollo plantea como ejes la Paz, la Equidad y la Educación, su énfasis está colocado en la infraestructura, el sector minero-energético y la agroindustria; el extractivismo se ha ido implementando con base en los dos últimos sectores. El sector minero-energético tiene una alta participación en el PIB del país, por ello el gobierno nacional desarrolla los mecanismos necesarios para seguirlo consolidando como motor del desarrollo, pues concluye que estimular su crecimiento contribuirá al logro de la paz, la equidad y una mejor educación.

Muchas comunidades Afrodescendientes se encuentran en zonas donde confluye la presencia de actores armados ilegales (FARC, ELN, BACRIM) con la existencia de territorios ricos en minerales, presentándose así, un contexto en que el Estado se ve debilitado en su capacidad de garante de derechos. Especialmente para el pueblo Afrodescendiente, la apuesta al modelo extractivista, al contrario de promover la paz y la equidad, tiene el efecto de intensificar los sistemas que han generado violencia y discriminación.

En el marco del conflicto armado, las comunidades negras, Afrocolombianas, raizales y palenqueras, como sujetos colectivos e individualmente considerados han sufrido daños y amenazas a su integridad física, étnica y cultural como consecuencia de las infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de Violaciones sistemáticas a las normas internacionales de derechos humanos (Ministerio del Interior, 2012).

Según lo plasma en el Conpes 3726 de 2012:18, no existe precisión del universo de víctimas de acuerdo a la pertenencia étnica, ya que los registros históricos incluyen esta variable desde el año 2004. No obstante de acuerdo con la información existente sobre el desplazamiento forzado, el 9,7 % de las víctimas registradas se reconoce como población afrocolombiana y raizal (Ministerio del Interior, 2012).

Los habitantes de los territorios colectivos han sido víctimas de actos de violencia y desplazamiento forzado, sobre todo en el chocó biogeográfico y en la Costa Caribe en los territorios insulares continentales y en algunas zonas costeras.

El conflicto armado en el territorio ancestral de esta población es aparentemente proporcional a la titulación colectiva en el Medio y Bajo Atrato, Urabá Chocoano y Antioqueño, Costa Nariñense, corredor de valles interandinos entre Cauca, Valle y Nariño y Montes de María y en la Costa Caribe (Grueso, 2007).

Para lograr la consolidación de los sectores extractivistas, se ha flexibilizado la legislación interna eliminando los obstáculos legales que dificultan la inversión extranjera, todo ello en detrimento de los derechos de las comunidades asentadas en los territorios donde se encuentran los recursos, y de la fortaleza institucional que debería existir para garantizar los derechos de estas comunidades. La defensa del modelo de desarrollo implementado por el gobierno Colombiano no solo desconoce el modelo de desarrollo de las comunidades Afrocolombianas, sino que va en contra del mismo. Por ellos, estas comunidades se han manifestado en resistencia contra las propuestas de desarrollo que en nombre de erradicar la pobreza genera condiciones de despojo y miseria.

3. POLÍTICAS QUE PROMUEVEN O PERMITEN LA MINERÍA ILEGAL: SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS COMUNIDADES AFRO DESCENDIENTES EN EL NORTE DE CAUCA.

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos opinó en su último informe que: “Colombia es un país lo suficientemente grande como para dar cabida a diferentes visiones de desarrollo, donde la explotación de los recursos minerales, la agricultura industrializada y la producción energética a gran escala pueden coexistir con la minería comunitaria, la agricultura familiar, la protección de las culturas y valores de los pueblos indígenas y de las comunidades Afrodescendientes tradicionales, así como la protección del medio ambiente (Naciones Unidas, 2015).”

Sin embargo, podemos constatar que en realidad estos modelos diferentes de desarrollo no coexisten; al contrario el modelo extractivista que promueve el gobierno está acabando con los proyectos y culturas locales. La apuesta del gobierno al desarrollo basado en el extractivismo, en el contexto de una falta de garantías reales para los derechos humanos, significa que esta visión de desarrollo se realiza al costo de los derechos y las culturas de las comunidades Afrodescendientes tradicionales. La situación de las poblaciones Afrocolombianas en el Norte del Cauca ilustra esta realidad nacional.

La riqueza de los territorios ancestrales ubicados en el norte del Cauca ha despertado el interés de multinacionales y mineros ilegales, y frente a ello, la oposición de las comunidades en defensa de su territorio y de su propia concepción de desarrollo ha venido generando un conflicto en el que estas comunidades se ven sometidas a la imposición de un modelo de desarrollo que vulnera su derecho a la autonomía e integridad cultural; en la práctica el modelo de desarrollo promovido por el estamento nacional va en contravía del desarrollo concebido por las comunidades Afrodescendientes.

4. MINERÍA EN EL NORTE DE CAUCA

4.1. LA MINERÍA REALIZADA POR LAS COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES

El norte del departamento de Cauca está conformado por 13 municipios con una población aproximada de 400.000 habitantes de los cuales el 46% son Afrodescendientes, localizados en su gran mayoría en zonas rurales (ACONC).

Como la mayoría de las comunidades Negras rurales en el país, la población de esta región tiene vocación agrícola y minera—agricultura de subsistencia y la minería artesanal y en pequeña escala. La minería artesanal ha sido desarrollada ancestralmente por la población Afrodescendiente desde la época de su esclavización entre los siglos XVI y XIX.

Las comunidades del Norte del Cauca se han caracterizado por su fuerte resistencia en defensa de sus derechos territoriales frente a variedad de amenazas, especialmente por las confrontaciones entre grupos armados insurgentes, paramilitares y del Estado por el

control económico y militar de los territorios, y también la presencia de economías depredadoras ilegales (Ministerio de Ambiente, 2015) y extractivas, como son los monocultivos y del oro (Univalle, 2012).

Según Estudio del Servicio Geológico Colombiano, febrero de 2012, mostró que en la mayor parte del territorio del Cauca se puede hallar oro y cobre (Univalle, 2012). Particularmente en la última década el aumento exponencial en los precios del oro ha llevado a la mecanización de la mayor parte de la minería aluvial desarrollada en el país, con impactos socio ambientales, económicos y culturales profundamente sentidos por las comunidades. Tanto la presencia ilegal de empresas multinacionales como el desarrollo de la minería ilegal a cargo de actores armados han generado una violación persistente de los derechos humanos de la comunidad asentada en estos territorios.

4.2. La minería ilegal por actores armados y sin títulos

El mayor problema inmediato que afrontan las comunidades en estos municipios es la minería activa sin títulos y armada (Revista virtual Semana, 2013). De la misma manera lo plantea la Universidad Javeriana Cali, en un reciente estudio denominado Análisis de las Posesión territorial y situación interétnica e intercultural en el Departamento del Cauca, 2013. La explotación del oro por parte de foráneos está azotando los municipios de Guachené, Santander de Quilichao, Buenos Aires y Suárez. Si bien es difícil determinar quiénes son los dueños de las enclaves mineros que se protegen con hombres fuertemente armados, hay indicios de la relación de esta minería con grupos paramilitares reorganizados como las Águilas Negras, Los Rastrojos comandos urbanos, a juzgar por los panfletos y mensajes telefónicos amenazantes que reciben los líderes y lideresas de la región que están cuestionando la presencia de esta minería en sus territorios.

“El conflicto armado existente desde hace decenios entre el Gobierno, los paramilitares y la guerrilla se ha desarrollado en gran medida en territorios Afrocolombianos (McDougall, 2011). Cauca es reconocido como el corazón del conflicto armado interno (Colombiapiña, 2011). Además de la debilidad institucional para garantizar el derecho al desarrollo de las comunidades indígenas y Afrodescendientes, muchas de ellas se encuentran en zonas donde confluye la presencia de actores armados (FARC, ELN, BACRIM, Paramilitares) con la existencia de territorios ricos en minerales, presentándose así, una violación sistemática de sus derechos, los mismos que el estado no ha garantizado.

Con la Ley Páez Ley 218 de 1985, 130 empresas trasnacionales se asentaron en ésta región; se han presentado más de 1200 solicitudes de títulos de explotación minera en el departamento del Cauca que cubren un total de 1 millón 600 mil hectáreas, que configuran el 56% del territorio. Así mismo el Cauca es considerado un corredor estratégico de movilidad de armas y droga, que comunica a los departamentos del Cauca la Tolima y el Valle del Cauca. Gran parte de las rutas de envío de drogas ilícitas y los canales comerciales para armamento y contrabando (Moreno, 2012).

4.2.1. CASO SAN ANTONIO

En el 2010, mineros foráneos sin ningún permiso de explotación por parte INGEOMINAS (hoy responsabilidad de la Agencia Nacional de Minería), y sin consulta o consentimiento de los Consejos Comunitarios, autoridades étnicas Afrodescendientes, iniciaron actividades de explotación de oro a cielo abierto con retroexcavadoras, en las localidades de San Antonio y el Palmar en el municipio de Santander de Quilichao, Departamento del Cauca.

Se ha establecido que la excavación en San Antonio, además de las vidas que ha cobrado (muchas no reconocidas ni denunciadas), ha causado más de 30 kilómetros de daño a la tierra y el medio ambiente.

Las operaciones fueron forzadas a parar por el derrumbe de una de las minas del área de San Antonio donde por lo menos 40 personas quedaron sepultadas bajo el lodo. Las autoridades solo recataron 14 cuerpos. El gobierno colombiano firmó un acuerdo para el control de la minería ilegal en la región, la reparación integral a las familias de las víctimas del desastre y la formulación participativa y concertada con los Consejos Comunitarios de medidas que contribuyan a fortalecer las oportunidades económicas para las comunidades en la región. Hasta la fecha este acuerdo no se ha cumplido.

4.2.2. CASO LA TOMA

El ejercicio de la minería ancestral es una fuente de ingresos para las 1.300 familias Afrodescendientes que habitan en la comunidad de la vereda la Toma en el municipio de Suárez y reportan practicar este trabajo desde el año 1636. La comunidad Afrodescendiente venía desarrollando el ejercicio de la minería ancestral de tal manera que se seguía preservando la vida del río Ovejas y con ello los servicios que el mismo prestaba a la comunidad.

Pero hoy, fruto del ejercicio de la minería ilegal, el río ha sido desviado de su curso normal, las retroexcavadoras y sustancias tóxicas como el cianuro y el mercurio circulan por su cauce, alterando con ello los derechos de la comunidad a la vida, a la autonomía y

a la integridad cultural. La contaminación con mercurio y cianuro del río Ovejas, que surte con sus aguas a las comunidades Afrodescendientes, está poniendo en peligro la vida de sus pobladores.

La comunidad ha presentado las denuncias pertinentes ante la fiscalía general de la nación y la Corte Constitucional Colombiana expidió la Sentencia T-1045A que obliga a la protección de los derechos de las comunidades de La Toma. La mayoría de los mineros asentados en la región provenían de las minas de Zaragoza cercanas al Puerto de Buenaventura, que fueron cerradas después de descubrirse que había operado por dos años de manera ilegal.

A pesar de la denuncia hecha ante las autoridades locales y nacionales sobre la actividad minera ilegal, las autoridades hicieron caso omiso de las demandas de las comunidades de controlar el avance de esta minería, lo cual permitió su expansión a toda la región del Norte del Cauca con los consecuentes daños ambientales irreparables y los impactos a los derechos territoriales y culturales de las comunidades Afrodescendientes. Ha sido tal su ausencia, que la misma comunidad ha optado, en un acto de resistencia activa, por detener las retroexcavadoras y como consecuencia de ello han sido amenazados y han tenido que desplazarse a otros municipios.

5. LA SITUACIÓN DE CONCESIONES ILEGALES A EMPRESAS MINERAS

Aclaremos que para las comunidades Afrodescendientes que están organizadas para defender sus derechos territoriales, respaldadas por los dictámenes de la Ley 70 de 1993 y la sentencia de la Corte Constitucional T1045A, toda minería que se imponga sobre sus territorios sin implementar procesos de consulta previa, libre e informada y consentimiento previo, tienen carácter ilegal. Esto incluye la minería que tiene títulos otorgados por la autoridad minera sin agotar el recurso de la consulta y consentimiento previos, lo cual hace de los proceso de otorgamiento actos inconstitucionales por parte del gobierno.

Las concesiones mineras sobre territorios ancestrales en la región del Norte del Cauca son de gran preocupación para las comunidades étnicas. Las autoridades regionales han

informado que para la región del Norte del Cauca existen 267 concesiones mineras para la explotación del oro, carbón y otros minerales, otorgadas por INGEOMINAS, hoy la Agencia Nacional de Minería. A pesar de que no se ha iniciado la fase de explotación en la mayoría de ellos, la experiencia en otras regiones del país ya ha demostrado los severos impactos que esperan al territorio, el medio ambiente y los derechos territoriales de las comunidades. Citamos con especial preocupación otro caso que acompañamos, que es el de La Colosa, de la compañía Anglo Gold Ashanti, en el departamento del Tolima.

El Centro de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali analiza que de las 350.000 hectáreas tituladas en el Cauca hasta diciembre de 2012, 82.000 se traslapan con Consejos Comunitarios (Verdadabierta.com, 2014). Las concesiones para la explotación de recursos naturales se han hecho a multinacionales como Anglo Gold Ashanti y Kosigo Resources, a compañías o grupos nacionales como Quedada Resource y a algunos individuos (Duarte, 2013).

De acuerdo con el CINEP / Programa por la paz, en el informe sobre Minería, Conflictos y Violación de Derechos Humanos, 2013, en el Departamento del Cauca varios de sus municipios como Santander de Quilichao tiene el 65% del territorio solicitado en concesiones, de las cuales se han otorgado 18%. Sobre el municipio de Suárez hay 11.685 hectáreas tituladas que equivalen a un 40% del territorio, mientras que en el municipio de Suárez alrededor del 10% del territorio está bajo concesiones minera; de otorgarse todas las solicitudes, este municipio tendría comprometido el 70% de su territorio y recursos mineros, especialmente el oro, con multinacionales y compañías mineras.

Solo en las municipalidades de Buenos Aires y Suárez existen 35 concesiones mineras para la explotación del oro y el carbón, otorgadas sin la consulta y consentimiento previo de las comunidades potencialmente afectadas, como lo obliga el Convenio 169 de la OIT al cual Colombia está suscrita.

La entrada a los territorios por las empresas también contribuye a la militarización de la zona. Observamos la creación de unidades militares para proteger los intereses de las transnacionales. Los miembros de la comunidad de La Toma, por ejemplo, han declarado

que la construcción de una base militar en predios cercanos al sector urbano del municipio, ha tenido incidencias en el agravamiento del conflicto armado entre el gobierno nacional y las FARC. Como ha planteado la Defensoría del Pueblo, las concesiones coinciden con el recrudecimiento del conflicto armado (Defensoría del Pueblo, 2013). Así que la animación de la extracción a gran escala, junto con la explotación ilegal de los recursos como fuente de financiamiento de los actores armados ilegales, genera una situación en la que la población civil sufre las consecuencias del conflicto no solo por estar en medio del mismo sino especialmente por defender sus derechos al territorio y a la autodeterminación.

Por su parte, el titular de una licencia otorgada en territorio del Consejo Comunitario de La Toma, Héctor Sarria, demandó en mayo del 2010 de la alcaldía de Suárez una orden de desalojo (The War we are living, 2010), de al menos cinco mil familias que viven de la minería artesanal en ese territorio, la cual fue afortunadamente impedida por el Consejo Comunitario.

En el año 2010 el Consejo Comunitario de La Toma interpuso acción de tutela para evitar el desalojo de estas cinco mil familias. De esta acción las comunidades obtuvieron la sentencia 1045A/2010 de la Corte Constitucional Colombiana que declara ilegal toda actividad minera a cielo abierto que no corresponda con las prácticas tradicionales ancestrales de las comunidades y obliga al gobierno colombiano a derogar los títulos mineros otorgados sin consulta previa.

La Corte Constitucional, tutelando sus derechos, se pronunció que “en la explotación de los recursos naturales en áreas tradicionalmente habitadas por estas comunidades deben hacerse compatibles los deberes de protección ambiental con la defensa de la integridad social, cultural y económica de los pobladores, en su pervivencia como grupo humanos y como cultura (Constitucional & Pinilla Pinilla, 2010).” También manifestó que: “debe buscarse un equilibrio o balance entre el desarrollo económico del país, al que podría serle provechosa, prima face, la explotación y exploración de dichos recursos, con la indisponible preservación del medio ambiente, y la protección de la integridad y subsistencia de los grupos étnicos minoritarios.” Hasta la presente, esta sentencia no ha tenido cumplimiento.

En este sentido la Constitución Política en su artículo 330, dictamina que “los territorios indígenas estarán gobernados por consejos conformados y reglamentados según los usos y costumbres de sus comunidades”, es decir que el gobierno no puede hacer intervención directa sobre territorios comunitarios; por ello en su parágrafo expone que la explotación de los recursos naturales en dichos territorio indígenas se harán sin desmedro de la integridad cultural, social y económica .

Existen pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en las que se analiza casos similares, tal como es el caso del pueblo Saramaka vs Surinam, en el que se demanda al Estado parte por violar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y desconocer al pueblo de los suramakas; en dicha jurisprudencia esta corte internacional da lineamientos generales para el caso en comento, tal como lo dice en le numeral 143, el “Estado debe consultar con las comunidades afectadas respecto de los proyectos de desarrollo que se lleven a cabo en los territorios ocupados tradicionalmente, compartir los beneficios razonables con ellas y realizar evaluaciones previas de impacto ambiental y social (Amaya, 2007)”

La minería ilegal e inconstitucional y la implementación de proyectos de explotación del oro que desconocen los derechos de las comunidades locales han ido impidiendo mediante prohibiciones y amenazas el ejercicio de esa actividad ancestral en las comunidades, afectando de manera importante a las mujeres con esta vocación.

6. IMPACTOS SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS COLECTIVOS DE LAS COMUNIDADES

La contaminación y destrozos ambientales de las principales fuentes de agua para las comunidades de la región, como son el río Palo, el río Teta, el río Quinamayó y el río Ovejas están vulnerando los derechos fundamentales de las comunidades a la salud, la alimentación adecuada, el trabajo y la vida misma, además de violar directamente el derecho “a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico.”

Es ampliamente documentado que en el país la población Afrodescendiente que ha sido desproporcionalmente afectada por el desplazamiento interno debido en parte a la existencia de grandes proyectos mineros y agroindustriales en sus territorios y la relación de éstos con fuerzas paramilitares armadas que vulneran el derecho a la seguridad de las comunidades, lideresas y líderes, y la falta de voluntad política del gobierno colombiano para respetar el estado de derecho que protege los derechos de las y los Afrodescendientes. Tal como quedo consignado en los acuerdo firmados con el Estado colombiano, uno de ello fue el que se firmó con el Ministerio de Defensa el 11 de diciembre de 2004, en el que se comprometía de manera inmediata para la erradicación de la minería ilegal en los territorios ancestrales en el norte del Cauca; igualmente la Unidad Nacional de Protección UNP, se comprometió a entregarles recursos para la protección al Consejo Comunitario de la Toma el día 8 de diciembre de 2014, y de acuerdo al informe del Consejo Comunitario no se cumplió con lo establecido (Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, 2015).

La aparentemente mejora de la situación en las estadísticas esconde la crítica situación en algunas regiones. Por ejemplo, entre enero y febrero de 2013, tal como lo presenta un estudio de la Fundación (Ideas Para la Paz), en el departamento del Cauca fueron desplazadas 2.134 personas y de ellas el 42.2%, a saber unas 900 personas, eran del municipio de Suárez, el mismo donde se encuentra ubicado el territorio comunitario de la Toma.

El desplazamiento sigue siendo una realidad, así lo demanda la implementación de mega proyectos en el territorio de las comunidades Afrodescendientes.

6.1. Situación de las mujeres Afrocolombianas

En términos de la situación diferenciada de las mujeres Afrocolombianas, el relator de país para el presente examen mencionó los temas importantes de conflicto armado y restitución de tierra (NACIONES UNIDAS, junio 12 de 2015). Sin embargo, sería muy importante que el examen del Comité CERD preste atención específica en cómo las políticas del Estado que promuevan o permiten la minería ilegal – o sea informal o de grandes empresas – generan un impacto sobre las mujeres y una situación de doble discriminación – por ser de una minoría étnica y por ser mujeres. Igualmente en esta situación es fundamental mirar el tema de participación de las mujeres en las tomas de decisión.

Con la presencia de la minería a gran escala e ilegal, ha aparecido la prostitución de las jóvenes y la violencia sexual raramente denunciada.

En el examen de Colombia en 2013 el Comité CEDAW constató la discriminación persistente que sufren las mujeres rurales, indígenas y Afrocolombianas. Se declaró “profundamente preocupado porque los efectos desproporcionados del conflicto armado, junto con la repercusión negativa de los mega proyectos agrícolas y mineros, sobre estos grupos de mujeres están agravando la discriminación, las desigualdades y la pobreza imperantes que vienen sufriendo desde hace tiempo (Una Mirada a los Derechos de la Mujeres, 2013).” El Comité exhortó al Estado a buscar soluciones sostenibles para las mujeres que, entre otras cosas, incorporen el derecho de las mujeres a tener acceso a recursos productivos, tales como semillas, el agua y el crédito, e impulsen su capacidad para asegurar condiciones adecuadas de vida. Pide específicamente al Estado garantizar que “la protección de esos derechos prevalezca sobre los intereses lucrativos de terceros involucrados en mega proyectos agrícolas y mineros (Una Mirada a los Derechos de la Mujeres, 2013).”

Sin embargo, el Estado Colombiano ha fallado en atender las diferentes recomendaciones de manera apropiada, diferencial y oportuna. Más aún, ha fallado en proveer las condiciones dignas que las mujeres Afrodescendientes han demandado en diversos informes y denuncias y que, para el caso del Norte del Cauca, se encuentran consagradas en los acuerdos firmados con la Movilización de las Mujeres del Norte del

Cauca por la defensa de la vida en los territorios ancestrales, firmados en Diciembre 11 y 12 del 2014 (Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, 2015).

6.2. SOBRE CONSULTA PREVIA

Asegurar el derecho a la consulta previa y participación efectiva para cumplir con obligaciones nacionales e internacionales, y también como la mejor manera de realizar los derechos humanos y disminuir desigualdades y la discriminación racial.

En razón de las resistencias que demuestra el Estado para asumir, mas allá de la retórica, a la población Afrodescendiente como un grupo con derechos colectivos, el Estado tiene una seria deficiencia en entender, respetar e implementar el derecho fundamental de las comunidades Afrodescendientes a la consulta previa, libre e informada (Convenio OIT 169), un derecho que se constituye en la base de todos los derechos de las comunidades Afrodescendientes, incluido su derecho a la libre determinación como pueblo.

En Colombia mediante la Ley 21 de 1991 se adoptó el Convenio 169 de la OIT, que establece la Consulta Previa como un derecho fundamental de las comunidades étnicas. Nos recuerda el informe presentado por el Gobierno que la Corte Constitucional define este mecanismo de protección colectiva de las comunidades Afrodescendientes como “un proceso de diálogo y concertación intercultural entre dos concepciones de desarrollo, que surge como un derecho fundamental de los miembros del pueblo Afrocolombiano, Negro, Raizal y Palenquero, los pueblos indígenas y el pueblo Rom o gitano, para poder conocer y determinar las acciones a seguir frente a un proyecto, obra o actividad que se pretenda realizar dentro de su territorio, y afecte su integridad étnica y cultural.”

A pesar de los logros planteados en el informe presentado por el Gobierno, constatamos graves deficiencias en esta área.

OACNUDH observó un importante problema la “falta de participación política en decisiones que afectan a las personas que viven en las zonas de explotación minera, especialmente comunidades indígenas y Afrocolombianas. Concluyó “Sus derechos a la consulta previa en relación con los proyectos económicos implementados en sus

territorios están siendo ampliamente ignorados (Oacnudh-Unhcr).” También observó que a pesar del reconocimiento del derecho internacional por parte de Colombia, “altos funcionarios del Gobierno también han hecho comentarios públicos que presentan los derechos de consulta previa como un obstáculo para el desarrollo (Oacnudh-Unhcr).”

Ofrecemos como ejemplo que en el Consejo Nacional de Política Económica y Social Documento CONPES 3762 de 2013 el Departamento Nacional de Planeación, DNP plantea dentro de los lineamientos de política para el desarrollo de Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos que la consulta previa sigue siendo un obstáculo para “la agilidad y viabilidad del desarrollo de proyectos” en los sectores de infraestructura, hidrocarburos, minería y energía en el país (DNP, 2013).

Como ya hemos dicho la propuesta de desarrollo impulsada por el gobierno choca con el derecho que tienen las diferentes comunidades étnicas para decidir sobre su propio proceso de desarrollo, de tal manera que la consulta previa que se ha constituido como un mecanismo para proteger este derecho, ha venido siendo considerado por el gobierno como un palo en la rueda del desarrollo nacional, pues impide el crecimiento económico a partir del aprovechamiento de los recursos naturales renovables y no renovables, que se encuentran principalmente en los territorios ocupados por las diferentes comunidades étnicas. Para funcionarios del estado, la consulta previa con las y los Afrodescendientes es considerada costosa e interminable y un obstáculo para las políticas de desarrollo del país; para la Asociación Nacional de Industriales “el derecho de consulta previsto en la Constitución Nacional es una prerrogativa de los pueblos indígenas que no puede afectar los intereses generales de la nación ni paralizar el desarrollo social y económico sostenible (Organización Internacional del Trabajo, 2011).”

En agosto de 2013 las comunidades Negras realizaron el Primer Congreso Nacional Autónomo de Comunidades Afrodescendientes y las organizaciones de todo el país, y se dieron a la tarea de diseñar un protocolo de Consulta Previa, el mismo, que el gobierno se negó a estudiar y que posteriormente, tuvo que acoger como documento de referencia por mandato de la Corte Constitucional que así lo determinó mediante Sentencia T-576 de 2014.

Como citamos anteriormente, la Sentencia T-1045A de 2010 fue dictada por la Corte Constitucional en respuesta a una acción de tutela presentada por el Consejo Comunitario del Corregimiento la Toma, en el municipio de Suárez, Cauca. La tutela fue instaurada contra los ministerios del Interior, Minas y Medio Ambiente. Dicha comunidad reclamaba mediante este mecanismo el derecho a la consulta previa. No obstante la existencia de esta tutela, hoy la comunidad sigue exigiendo el derecho que les asiste para hacer efectiva la consulta previa en sus territorios. La sentencia citada es clara al manifestar que se trata de un derecho colectivo por su carácter Afrodescendiente y no de los derechos de una sumatoria de individuos.

Recordamos que el Comité para la eliminación de la discriminación contra las mujeres exhortó al Estado que “adopte medidas apropiadas para garantizar a las mujeres indígenas y Afrocolombianas su derecho a la consulta previa, de conformidad con las normas internacionales, con respecto, entre otras cosas, a la realización de mega proyectos de desarrollo.”

Si bien el Estado Colombiano habla en su informe de un proyecto de ley para protocolizar la consulta previa, libre e informada, ha desconocido la propuesta hecha por el Congreso Nacional Afrodescendiente y las posteriores iniciativas presentadas por su vocero la Autoridad Nacional Afrocolombiana (ANAFRO). Proyecto de Ley Estatutaria que fue inscrita en el congreso bajo el numero 125 de 2012 Senado, por la cual se establece la ley de participación y representación para las comunidades Negras, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras (senado, 2012).

7. DEFENSORES Y DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS

Dadas las constantes y crecientes amenazas a lideresas y líderes por sus acciones de protección del territorio y los derechos colectivos, se ha visto afectado el derecho a la vida, a la libre expresión, a la organización y la participación. De igual manera se está afectando el derecho a la salud física y emocional de hombres y mujeres sujetos al constante acoso que se sufre frente a las amenazas de las comunidades y sus líderes, por la estigmatización que sufren las comunidades que defienden sus derechos y se encuentran en oposición con sus mismos coterráneos defendiendo una minería que les

produce sustento, a pesar de los enormes daños ambientales y sociales bien reconocidos por todos.

Desde el año 2010 la comunidad del corregimiento La Toma en el municipio de Suárez, viene siendo objeto de amenazas por oponerse a la aplicación de proyectos mineros que atentan contra su autonomía y limitan sus derechos al territorio, la Revista Semana lo ha documentado así:

“El miércoles 7 de abril llegaron por la mañana nueve Afrocolombianos a la vereda El Hato Santa Marta, del corregimiento La Toma, del municipio de Suárez (Cauca). Querían instalarse cerca de la orilla del río Oveja para extraer oro, cuando aparecieron tres hombres armados. ‘Nos dijeron que no podíamos estar ahí y dispararon’, dijo el único sobreviviente de la matanza, que huyó herido, llegó a la cabecera de la vereda y luego fue trasladado al hospital de Santander de Quilichao” (Revista Virtual Semana. com 2010).

La presentación de una tutela presentada por la señora Francia Márquez, pidiendo la protección del territorio comunitario de la Toma en el municipio de Suárez Cauca, por violación del derecho a la consulta previa, libre e informada que dio origen a la sentencia T-1045A de 2.010 trajo como consecuencia para ella amenazas de muerte y por ello ha tenido que desplazarse para proteger su vida.

Las mujeres de la comunidad La Toma no han parado en su trabajo por la defensa del territorio, sus acciones se han desarrollado dentro del territorio y fuera de él; han detenido el avance de las retroexcavadores, han realizado manifestaciones y movilizaciones y como consecuencia de ello, varias de ellas se encuentran amenazadas, también varios de sus compañeros, sus hijos e hijas que, como Francia Márquez han tenido que desplazarse a otros municipios para proteger sus vidas. La supervivencia de la comunidad Afrodescendiente está en peligro no solo por la implementación de proyectos que atentan contra ella, sino también por la amenaza de muerte de parte de quienes ven afectados sus intereses contra quienes se oponen a la explotación minera en sus territorios. No obstante los riesgos y las amenazas de muerte, solo dos personas cuentan con medias de protección que no se ajustan a sus necesidades específicas de protección y los riesgos reales que corren. Los equipos entregados por la Unidad Nacional de Protección (UNP)

para garantizar la protección de las víctimas no funcionan y no se han implementado medidas para garantizar la protección colectiva de la comunidad.

El riesgo se ha incrementado para líderes y lideresas, la situación económica se ha deteriorado y ambas situaciones están causando desplazamiento interno. El deterioro ambiental es incalculable. El riesgo de que la gente Afrodescendiente pierda sus territorios y termine en cordones de miseria en la ciudad de Cali es inminente. La negativa del gobierno a avanzar en el desmantelamiento de la minería ilegal, derogar títulos que son ilegales por falta de Consulta Previa Libre e Informada, investigar y generar justicia son factores que tienen a los Consejos Comunitarios, organizaciones, lideresas y líderes en una situación grave de deterioro de su seguridad, sin mayores opciones dada la creciente falta de confianza que tienen en las autoridades locales y nacionales por la corrupción y burocratización de sus procesos.

8. RECOMENDACIONES

- a) Reglamentar los capítulos IV, V, VI y VII de la Ley 70 de 1993 para evitar “la vulnerabilidad de las comunidades, de sus territorios rurales y urbanos y de sus diversas formas de representación (Corte Constitucional , 2014)”
- b) Formular propuestas legislativas que garanticen la inclusión de las variable étnica y cultural en todas las políticas, programas, proyectos, instrumentos de recolección de información y de denuncia, así como en todas las acciones dirigidas al pueblo Afrocolombiano, Negro, Raizal y Palenquero, garantizando un enfoque de género y generacional efectivo y transversal, para garantizar efectiva protección y pleno ejercicio de sus derechos.
- c) Respetar el derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada que tienen las comunidades Afrodescendientes, garantizando un enfoque de género y generacional que efectivamente de voz a las mujeres y jóvenes Afrodescendientes, cuando se trata de implementar

proyectos en sus territorios, acogiendo las propuestas que ha presentado la Autoridad Nacional Afrocolombiana (ANAFRO).

- d) Garantizar la participación de la comunidad Afrodescendiente en la elaboración del proyecto de ley estatutaria que reglamenta el proceso de consulta previa, para que se constituya en herramienta que facilite la inclusión de las comunidades étnicas, reconozca sus aportes y proteja sus derechos
- e) Tomar medidas para erradicar la minería ilegal en todos los territorios ancestrales y colectivos ocupados por las comunidades Afrodescendientes. Ordenar la detención de las actividades mineras que se vienen desarrollando con desconocimiento del requisito de la consulta previa, libre e informada en los territorios Afrodescendientes y buscar los mecanismos para derogar títulos mineros que han sido otorgados de manera inconstitucional en los territorios Afrodescendientes.
- f) Tomar medidas para reconocer, proteger y fortalecer la minería ancestral.
- g) Disponerse para el cumplimiento efectivo de los acuerdos firmados con organizaciones y movimientos de mujeres, como una manera de atender de manera integral, diferenciada y apropiada a las necesidades específicas identificadas por estas. Específicamente, dar cumplimiento a los acuerdos suscritos entre las mujeres del Norte del Cauca y el Gobierno Nacional, firmados el 11 y 12 de Diciembre de 2014.
- h) Atender la petición de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca y otorgar la titulación colectiva de sus territorios ancestrales
- i) Garantizar la seguridad de los líderes y lideresas que arriesgan sus vidas por defender sus territorios.

9. BIBLIOGRAFÍA

ACONC. (n.d.). Retrieved from Diálogos Interculturales sobre la Minería en el Norte del Cauca: <http://www.aconc.org/category/mineria/>

Amaya, A. C. (2007). *Cultura Política y Perdón*. Bogotá: Universidad del Rosario.

Americas, W. A. (2001, marzo 17). *Reciente violaciones a los Derechos Humanos de Afro-Colombianos*. Retrieved Diciembre 20, 2015, from http://www.wola.org/es/informes/violaciones_recientes_de_los_derechos_humanos_de_afro_colombianos

ANAFRO. (2016, 02 18). *afrodescendientes.com*. (ANAFRO, Producer) Retrieved 06 20, 2016, from afrodescendientes: <https://afrodescendientes.com/blog/2016/02/18>

Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca. (2015, Marzo 20). Retrieved from ACONC: <http://www.aconc.org/about/>

Bonafini, H. d. (1995, Abril). *El Pais*.

Caso del Pueblo Saramaka vs Surinam, 28.11.2007 (Corte Interamericana de Derechos Humanos Noviembre 28, 2007).

CERD, N. U. (28 de agosto de 2009). *Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial*. Naciones Unidas: CERD/C/COL/CO/14.

Chaparro, A. (2007). *Cultura Política y Perdón*. Bogotá D.C: Universidad del Rosario.

CIDH. (12 marzo de 2008). *Audiencia sobre Situación de los Derechos Humanos de los Afrocolombianos desplazados en Colombia*.

CIDH, Tercer Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Colombia, OEA. (1999, Febrero 26). Retrieved Noviembre 14, 2015, from <http://www.cidh.oas.org/countryrep/ColombiaAfrodescendientes.sp/ColombiaAfros2009cap1-2.sp.htm>

Colombia. (2012). *Ministerio de Educación Nacional*. Retrieved Abril 20, 2013, from www.mineduacion.gov.co

Colombia, C. d. (2001, Diciembre 27). *Ley 725*. Retrieved from http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/articles-232084_archivo_pdf.pdf

Colombia, C. N. (1993, Septiembre 27). *Ley 70 de 1993*. Retrieved Diciembre 21, 2015, from www.senado.gov.co

Colombiana, C. P. (2015, Diciembre 19). *Constitución Política Colombiana, 1991*. Retrieved from <http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Documents/Constitucion-Politica-Colombia.pdf>

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (1999, 26 Febrero). Retrieved Diciembre 20, 2015, from CIDH: http://www.cidh.org/countryrep/ColombiaAfrodescendientes.sp/ColombiaAfros2009cap1-2.sp.htm#_ftnref11

Congreso Nacional de la República de Colombia. (2006, Enero 2006). *Mineduacion*. Retrieved Abril 10, 2013, from De fomento a la cultura del emprendimiento: www.mineduacion.gov.co

Congreso Nacional de la República. (1994, febrero 8). *Mineduacion*. Retrieved BRIL 21, 2013, from www.mineduacion.gov.co

Constitución Política Colombiana 1991. (2015, Diciembre 19). Retrieved from <http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Documents/Constitucion-Politica-Colombia.pdf>

Constitucional, C., & Pinilla Pinilla, N. (2010, Diciembre 14). *Identidad e Integridad Étnica, Cultural, Social y Económica de Comunidades Afrodescendientes*. Retrieved from Sentencia T-1045A/10 : <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/t-1045a-10.htm>

Corte Constitucional . (2014, Agosto 4). *Afrocolombianos y sus comunidades como titulares individuales y colectivos de derechos fundamentales, fundamentos normativos y jurisprudencia*. Retrieved from Sentencia T 576-14: <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/t-576-14.htm>

Dane. (2005). Retrieved 1 20, 2015, from Dane. Gov: <http://www.dane.gov.co>

Decreto 804 de 1995. (1995, Mayo 18). Retrieved from <http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1377>

Defensoría del Pueblo. (2013, Marzo 23). Retrieved from Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgo de Violaciones de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, DIH-SAT, Sistemas de Aletas Tempranas SAT : <http://sisat.defensoria.org.co:8097/subsitio/doc/historicoAdvertencia/IR2012PDF/IR%20N%C2%B0%20001-12%20A.I.%20CAUCA-Morales%20y%20Suarez.pdf>

DNP. (2013, 08 20). colaboracion.dnp.gov.co. Retrieved 07 09, 2015, from dnp.gov.co: <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/conpes/Económicos/3762.pdf>

Duarte, C. (2013). *Desencuentros Territoriales* (Vol. I). (U. Javeriana, Ed.) Cali: Javerian.

Estado Colombiano. (2014). *Informe del Estado Colombiano presentado ante el CERD en virtud del artículo 9 de la Convención*.

Familia Franciscana en Colombia. (1996, Noviembre 29). Retrieved from <http://www.familiafranciscanadecolombia.org.co/acta-fundacional.html>

Franciscans Intenational. (1982). Retrieved from <http://franciscansinternational.org/History-of-FI.119.0.html>

Fundación para la reconciliación. In *Cultura Política de Perdón y Reconciliación* (p. 344). Bogotá D.C: Leonel Narváez Gómez, Segunda Edición.

González, B. (2011, Nov 25). viva.org.co. (C. d. Herramientas, Editor) Retrieved Dic 18, 2015, from Caja de herramientas : vivi.org.co/cajavirtual/svc082/articulo07.html

Grueso, L. (2007). *Misión de observación en la población Afrocolombiana 2002. Informe sobre la situación de la población Afrocolombiana. Citado en DNP plan Integral de Largo Plazo, eje de Derechos Humanos*. Bogotá, D.C.

Ideas Para la Paz. (n.d.). Retrieved from Unidades de Análisis Siguiendo el Conflicto, Boletín N° 72: <http://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/53b5910826062.pdf>

Informe Sobre la visita en relación con las medidas provisionales a favor de comunidades Afrodescendientes. (2009, Febrero 20). Retrieved from <http://www.cidh.org/countryrep/MPColombia2.20.09.sp.htm>

Ley 115. (1994, 8 Febrero). Retrieved from http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf

Ministerio de Ambiente. (2015). *Agencia Nacional de Minería*. Retrieved from Licencia Ambiental: https://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/permisos_ambientales.pdf

Ministerio de Educación Nacional. (n.d.). *mineducación.gov.co*. Retrieved abril 20, 2014, from Ley General de Educación: www.mineducación.gov.co

Ministerio del Interior. (2012). *El enfoque diferencial para comunidades negras, afrocolombianas, riazales y palenqueras víctimas del conflicto armado*. guía, Ministerio del Interior, Bogotá.

Moreno, F. E. (2012, 07 14). Las razones detrás del Conflicto en el Cauca. *ARCOIRIS*.

Naciones Unidas. (2015, Enero 23). Retrieved from Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre los derechos humanos en Colombia: <http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/informes.php3?cat=11>

Naciones Unidas Derechos Humanos, Oficina del Alto Comisionado. (1965, 21 Diciembre). Retrieved Diciembre 2015, 2015, from <http://www.ohchr.org>

Naciones Unidas. (12 junio 2015). *Lista de temas relativa a los informes periódicos 15º y 16º de Colombia*. CERD/C/COL/Q/15-16.

NACIONES UNIDAS. (junio 12 de 2015). *Lista de temas relativa a los informes periódicos 15º y 16º de Colombia*. CERD/C/COL/Q/15-16.

Naciones Unidas. (28 Agosto de 2009). *Observaciones Finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial*. UNDoc. CERD/C/COL/CO.

OACNUDH-UNHCR. (n.d.). *Informe 2014*. Retrieved from <http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/informes.php3?cat=11>

OEA: CIDH. (1948). Retrieved Diciembre 20, 2015, from www.oas.org/es/cidh

Organización Internacional del Trabajo. (2011). *Seguridad Social para la Justicia Social en una Globalización Equitativa*. Retrieved from http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_154235.pdf

Porafolio. (2014, Diciembre 14). Retrieved Diciembre 20, 2015, from <http://www.portafolio.co/economia/distribucion-riqueza-colombia-2014>

Revista virtual Semana. (2013, marzo 29). Retrieved from Minería ilegal: entre el oro y el crimen: <http://www.semana.com/nacion/articulo/oro-crimen-mineria-ilegal/338107-3>

Revista Virtual Semana. com. (2010, Abril 8). Oro, violencia y muerte en Suárez Cauca. Bogotá, Cundinamarca, Valle del Cauca.

senado, G. (2012, 09 27). *Imprenta*. Retrieved 06 06, 2015, from www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?_188¿p_tipo_numero=125&¿p_consec=34216

The War we are living. (2010). Documental de PBS. *Women, War and Peace*.

Una Mirada a los Derechos de la Mujeres. (2013). *Informe Alternativo Presentado al comité de la CDAW*. Bogotá: http://www.cladem.org/pdf/ColombiaIA_2013_cedaw.pdf.

Univalle. (2012). *Áreas con potencial mineral para definir áreas de reserva estratégicas del Estado*. Retrieved from Informe Servicio Geológico Colombiano: www.ingominas.gov.co/Noticias/General/Areas-Estrategicas-Mineras.aspx

Universidad del Rosario. (2010, Octubre 01). *urosario.edu.co*. (U. d. Rosario, Editor, & C. Previa, Producer) Retrieved Julio 05, 2016, from qué es la consulta previa: www.urosario.edu.co/jurisprudencia/catedra-viva

VERDADABIERTA.COM. (2014, Junio 18). Retrieved from Minería en el Cauca: ¿riqueza para quién?: <http://www.verdadabierta.com/lucha-por-la-tierra/5362-mineria-en-el-cauca-riqueza->